

Santiago, trece de octubre de dos mil veinte.

Vistos:

En los autos RIT T-300-2019, RUC 1940167118-0 del Segundo Juzgado Letras del Trabajo de Santiago, por sentencia de siete de agosto de dos mil diecinueve, se acogió la denuncia por Tutela de Derechos Fundamentales, deducida por María José González Jeria en contra del Servicio de Salud Metropolitano Central Hospital Clínico San Borja Arriarán, sin costas.

Contra este fallo, la parte demandada dedujo recurso de nulidad fundado en las causales previstas en los artículos 478 letra a), 477 por infracción de ley y 478 letra e), todos del Código del Trabajo, las que deduce de manera subsidiaria.

Declarada la admisibilidad del recurso, se procedió a su vista alegando los apoderados de ambas partes.

Considerando:

Primero: Que el recurrente deduce, en primer lugar, la causal del artículo 478 letra a) del Código del Trabajo, fundada en que consta en el proceso, que la actora era funcionaria bajo el régimen a contrata, esto es una relación estatutaria, cuyo nacimiento, desarrollo y extinción, se encuentra íntegramente regido por el estatuto administrativo, y no obedece a una relación de subordinación y dependencia como aquella que opera en el ámbito del derecho laboral. Sobre el particular, señala que el artículo 1º del Código del Trabajo, en lo pertinente dispone que: “la aplicación del Código del Trabajo no será aplicable a los funcionarios de la Administración del Estado, centralizada y descentralizada, Congreso Nacional y Poder Judicial, trabajadores de las empresas del Estado o en las que éste tenga aportes, participación o representación, siempre que dichos funcionarios o trabajadores se encuentren sometidos por ley a un estatuto especial”. Por su parte, el artículo 1º del Estatuto Administrativo, establece en forma expresa que las relaciones entre el Estado y el personal de los Ministerios, Intendencias, Gobernaciones y de los servicios públicos centralizados y descentralizados creados para el cumplimiento de la función administrativa, se regularán por las normas del presente Estatuto



Administrativo. Asimismo el literal c) del artículo 3° del cuerpo legal citado, define el empleo “a contrata” como aquel de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución.

Conforme a lo anterior refiere que la relación de la actora con su parte, no comparte la naturaleza jurídica de los contratos regidos por el Código del Trabajo, por cuanto los vínculos establecidos en calidad de nombramientos, son partícipes de la naturaleza jurídica de una modalidad estatutaria y reglamentaria reglado por normas de fondo de Derecho Público, que es aplicable a los Funcionarios Públicos y por consiguiente hace inaplicable las normas del derecho laboral a las relaciones entre tales funcionarios y los órganos del Estado.

A lo anterior agrega que uno de los principios fundamentales que rigen a la Administración Pública es el “Principio de Legalidad” contemplado en nuestra Carta Fundamental y en virtud del referido principio, es que precisamente, se procede a la contratación y se determina el régimen aplicable de los servidores públicos para desempeñarse en la Administración del Estado y obliga a ambos al cumplimiento de las normas vigentes, por lo tanto no cabe sino concluir que la denuncia carece de todo sustento desde el momento que contraría el ordenamiento jurídico y la realidad de la que el denunciante fue partícipe, percibiendo beneficios y adquiriendo derechos y obligaciones que regularon su relación con la Administración del Estado en su calidad de Funcionario Público a Contrata, motivo por el cual el estima que el Segundo Juzgado del Trabajo de Santiago, no era competente para conocer de la acción que da origen a estos autos.

Segundo: Que, el artículo 1° del Código del Trabajo, prescribe: *“Las relaciones laborales entre los empleadores y los trabajadores se regularán por este Código y por sus leyes complementarias.*

Estas normas no se aplicarán, sin embargo, a los funcionarios de la Administración del Estado, centralizada y descentralizada, del Congreso Nacional y del Poder Judicial, ni a los trabajadores de las empresas o instituciones del Estado o de aquellas en que éste tenga aportes,



participación o representación, siempre que dichos funcionarios o trabajadores se encuentren sometidos por ley a un estatuto especial.

Con todo, los trabajadores de las entidades señaladas en el inciso precedente se sujetarán a las normas de este Código en los aspectos o materias no regulados en sus respectivos estatutos, siempre que ellas no fueren contrarias a estos últimos.

Los trabajadores que presten servicios en los oficios de notarías, archiveros o conservadores se regirán por las normas de este Código”.

Tercero: Que, asimismo, corresponde considerar lo dispuesto en el artículo 1º del Estatuto Administrativo, esto es: “*Las relaciones entre el Estado y el personal de los Ministerios, Intendencias, Gobernaciones y de los servicios públicos centralizados y descentralizados creados para el cumplimiento de la función administrativa, se regularán por las normas del presente Estatuto Administrativo, con las excepciones que establece el inciso segundo del artículo 18 de la ley N° 18.575*”, como también lo señalado en su artículo 3º, que señala: “*Para los efectos de este Estatuto el significado legal de los términos que a continuación se indican será el siguiente: c) Empleo a contrata: Es aquél de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución*” y, por último, lo dispuesto en el artículo 9º, que prescribe: “*Los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos*”.

Cuarto: Que, de las disposiciones transcritas en los considerandos que preceden, resulta que el denunciante en su relación con el Servicio de salud Metropolitano se halla especialmente sometido al Estatuto Administrativo y, en forma supletoria, a las normas del Código del Trabajo, pero sólo en los asuntos no regulados por dicho Estatuto y en la medida en que las normas del Código Laboral no fueran contrarias a las de esa normativa especial.

Quinto: Que, de esas mismas disposiciones y de las restantes normas de la Ley N° 18.834, aparece que el Estatuto Administrativo establece su propia regulación en torno a las calidades funcionarias que pueden formar



parte de una dotación institucional y en cuanto a las causales de expiración en los cargos de los contratados: y, sus disposiciones, rigen con preferencia a quienes integran una dotación como la de que se trata, excluyendo el imperio del derecho laboral común en esos asuntos, al tenor de lo preceptuado tanto en los artículos 1º y 11 del mismo Estatuto Administrativo como en los incisos segundo y tercero del artículo 1 del Código del Trabajo, sin perjuicio de considerarse además el artículo 13 del Código Civil.

Sexto: Que, por otra parte, el artículo 485 del Código del Trabajo, establece que este procedimiento de tutela laboral- se aplicará respecto de las cuestiones suscitadas en la relación laboral por aplicación de las normas laborales, que afecten los derechos fundamentales de los trabajadores que allí se precisan. Es decir, a la vinculación surgida en los términos de los artículos 7º y 8º del mismo texto legal y, en caso alguno, a la relación estatutaria a la que se someten los funcionarios públicos a contrata, cuyo contenido está dado por las disposiciones de su propio estatuto, esto es, Ley N° 18.834.

Séptimo: Que, el artículo 478 letra a), establece que el recurso de nulidad procederá, además: *“Cuando la sentencia haya sido pronunciada por juez incompetente, legalmente implicado, o cuya recusación se encuentre pendiente o haya sido declarada por tribunal competente”*;

Que, en armonía con lo reflexionado, sólo corresponde acoger el presente recurso de nulidad por esta causal por haberse incurrido en el error de derecho anotado.

Octavo: Que, habiéndose acogido la causal de nulidad deducida de manera principal por el recurrente, se omitirá pronunciamiento de las siguientes por haber sido deducidas de manera subsidiaria.

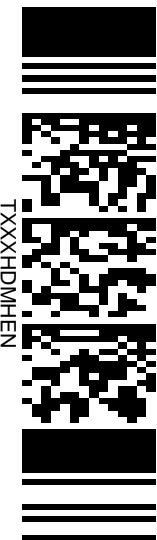
Por esta razón y de conformidad, además, con lo previsto en los artículos 477 a 482 del Código del Trabajo, **se acoge**, el recurso de nulidad interpuesto por la parte demandada, y consecuentemente se invalida la sentencia definitiva de siete de agosto de dos mil diecinueve, dictada por el Segundo Juzgado de Leras del Trabajo de Santiago, al haberse dictado esta por un tribunal incompetente.

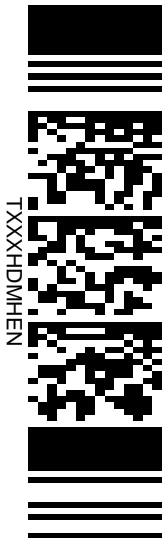


Regístrese y comuníquese.

Redacción del Ministro señor Alejandro Madrid Croharé, quien no
firma por estar con licencia médica.

Rol N° 2391-2019.-





TXXXHDMHEN

Pronunciado por la Décima Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Dobra Lusic N., Tomas Gray G. Santiago, trece de octubre de dos mil veinte.

En Santiago, a trece de octubre de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

